EL ROL DE LA JUSTICIA CONSTITUCIONAL EN EL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA Y BIENES COMUNES

THE ROLE OF CONSTITUTIONAL JUSTICE IN THE PLURINATIONAL STATE OF BOLIVIA

*PEDRO GARECA PERALES*¹

RESUMEN:

El principal objeto de la comunicación es descifrar en su contexto y continente la estructura del nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, contenido en la Constitución de 7 de febrero de 2009, que fue aprobada por Referéndum de 25 de enero de 2009, y siguiendo el elenco de derechos, principios y garantías, establecer cuestiones relativas a la independencia y competencias del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y sus relaciones con los demás órganos del Estado; principalmente, con La Asamblea Legislativa Plurinacional y el Tribunal Supremo Electoral. Subsecuentemente, la relación con la justicia indígena originario campesino. De otro lado, se analizará como tema emblemático si el Tribunal Constitucional aplicando el bloque de constitucionalidad puede subrogarse competencias del Constituyente, derogando normativas de la Constitución con el propósito político de autorizar la “reelección indefinida” de mandatarios en ejercicio del poder, pasando por encima de los límites que marcó el Constituyente y el total desconocimiento de los resultados del Referéndum de 21 de febrero de 2016.

Para alcanzar los niveles de relacionamiento, independencia y el respeto normativo constitucional en el tema de perpetuación en el poder, se aplica como método el análisis crítico, jurídico y comparativo, además de desarrollar elementos sólidos y relevantes basados en esfuerzos regionales.

La protección de los bienes comunes y el derecho de los pueblos indígenas originario campesino en el disfrute de sus tierras comunitarias, ríos,

¹ Doctor en derecho por la Universitat de Valencia-España, docente de postgrado de la Universidad de San Francisco Xavier de Chuquisaca (CEPI) y Privadas, miembro de la Academia Boliviana de Estudios Constitucionales, obras escritas en derecho constitucional y articulista del Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano, revistas y periódicos.

manantiales, bosques y parques nacionales será tema vital en el enfoque temático.

PALABRAS CALVE:

Estado Plurinacional de Bolivia; Justicia Constitucional y originaria; Tribunal Constitucional; Independencia y límites al poder democrático y bienes comunes

ABSTRACT:

The main purpose of the communication is to decipher in its context and continent the structure of the new Plurinational State of Bolivia, contained in the Constitution of February 7, 2009, which was approved by Referendum on January 25, 2009, and following the list of rights, principles and guarantees, establish issues and its relations with the other organs of the State; mainly, with the Plurinational Legislative Assembly and the Supreme Electoral Tribunal. Subsequently, the relationship with indigene justice. On the other hand, will be analyzed as an emblematic issue if the Constitutional Court applying the constitutional block can be subrogated powers of the Constituent, repealing regulations of the Constitution with the political purpose of authorizing the "indefinite reelection" of presidents in the exercise of power, passing over of the limits that marked the Constituent and the total ignorance of the results of the Referendum of February 21, 2016.

To reach the levels of relationship, independence and constitutional respect for the subject of perpetuation in power, critical, legal and comparative analysis is applied as a method, as well as developing solid and relevant elements based on regional efforts.

The protection of the common possessions and the right of indigenous people, native peasant in the enjoyment of their communal lands, rivers, springs, forests and national parks will be vital issue in the approach to issue...

KEY WORDS:

Plurinational State of Bolivia, Constitutional and Indigene Justice, Constitutional Court, Independence and limits to democratic power and common possessions.

1. Introducción

A partir de la redacción original de la Constitución de 1967 y las modificaciones que sufrieron sus cláusulas, la de mayor transformación fue la reforma constitucional de 1994, que el Congreso Nacional de aquel entonces introdujo el Tribunal Constitucional. Ante el nuevo modelo de control de

constitucionalidad (Rivera:2004), acuñó “es un órgano concentrado de control de constitucionalidad y máximo intérprete de la Constitución”²².

Durante sus primeros diez años de vigencia el Tribunal Constitucional como órgano guardián de la Constitución, su organización, funciones y atribuciones estuvo regulado por la Ley N° 1836 de 19 de marzo de 1998, estructura que sentó las bases normativas de los diversos procedimientos, demandas y acciones constitucionales que le fijó la Constitución.

El procedimiento legislativo ha sido bastante variable y generoso en cuanto al Tribunal Constitucional y ¿por qué consideramos que esto ha sucedido?, porque su conformación y desarrollo ha surcado por tres vías definidas: 1) Los magistrados en número de cinco fueron elegidos por el Congreso Nacional por dos tercios de votos del total de diputados y senadores presentes, mediante un proceso de méritos y valoración de experiencia de diez años, por las diversas fuerzas políticas y por un periodo de duración de diez años³, 2) En vigencia de la Constitución de 2009 y tratándose del Nuevo Estado Plurinacional de Bolivia, el presidente Evo Morales Ayma dicta el Decreto Supremo N° 432 de 17 de febrero de 2010, con el argumento de cubrir acefalías nombra interinamente por un año a los Magistrados Fausto Juan Lanchipa Ponce, Abigael Burgoa Ordoñez, Ernesto Felix Mur, Ligia Mónica Velásquez Castaños y Marco Antonio Baldvieso Jinés, sin observar ningún proceso selectivo ni respetar la Constitución (CPE). Esta renovación transitoria que no recoge la construcción de un proceso previo con las fuerzas minoritarias del congreso, que contribuya a la cohesión, independencia y eficaz protección de los derechos fundamentales, develan sin lugar a dudas el carácter impositivo del poder político, situando en déficit el principio de la independencia de la justicia constitucional, 3) La hegemonía transitoria se consolidó con el modelo de elección democrática de siete Magistrados el 16 de octubre de 2011 a propuesta de organizaciones de la sociedad civil, de las naciones y pueblos indígenas originario campesinos, reduciéndose la experiencia a ocho años y el periodo de duración en ejercicio del cargo a seis años (2012-2017), los elegidos por el voto popular a nivel nacional fueron posesionados el 5 de enero de 2012 entre ellos: Gualberto Cusi, Efrén Choque Capuma, Ruddy José Flores Monterrey, Virginia Neldy Andrade Martínez, Ligia Mónica Velásquez, Mirtha Camacho, Soraida Chávez y Zenón Bacarreza (Los Magistrados Gualberto Cusi, Ligia Mónica Velásquez Castaños y Soraida Chávez fueron suspendidos por proceso

legislativo), ingresando como titulares los magistrados suplentes: Lahor Cortéz, Juan Osvaldo Valencia.

Más allá de la declaración del presidente Morales Ayma y del vicepresidente que dijeron: “ni los ponchos, polleras y abarcas han sido suficiente para cambiar la justicia que es un desastre”; sin embargo el sistema de elección democrática se volvió a repetir el 3 de diciembre de 2017 (2018-2023) con ligeras variantes, entre ellas: la participación de la Universidad Autónoma en el proceso inicial de calificación de méritos y preparación del banco de preguntas, participación que fue calificada de benevolente e interesada y sin ninguna trascendencia que vislumbre la selección de los mejores profesionales para desempeñar la función jurisdiccional constitucional. Entre las modificaciones cuantitativas se mencionan la elección de 9 Magistrados, y esta vez, fue por el sistema de sufragio departamental. Los dos procesos democráticos (2011 y 2017) se llevaron a cabo con padrones electorales nada saneados por las auditorías de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que encontró serias irregularidades y lo curioso que los magistrados más votados fueron elegidos con el 38% del padrón electoral (6.438.801 de sufragantes), donde los votos nulos y blancos fueron superlativamente superiores a los votos válidos; situación que podría dar pie a una demanda de nulidad contra los magistrados posesionados por el gobierno actual.

El Tribunal de los primeros diez años a través de su frondosa jurisprudencia, coherente y fundamentada, no solo que ha hecho prevalecer los principios de independencia y coordinación con los poderes del Estado, sino que ha impuesto una filosofía de importantes avances para la democracia, para la consolidación del Estado de Derecho, y primordialmente para frenar el abuso del poder político, ya que se –repite la historia-, es el régimen político el que controla y manipula los órganos del Estado, vulnerando las libertades, derechos fundamentales y principios de la cultura democrática del pueblo boliviano.

Hechas estas mínimas e imprescindibles aclaraciones, en preliminar síntesis, la regulación del Constitucional y de los Vocales Constitucionales que ejercen justicia constitucional en las capitales de los nueve departamentos del país (Bolivia), se encuentran previstas en los artículos 196 al 204 de la Constitución de 2009 y determina entre los lineamientos básicos de funcionamiento, la independencia e igualdad material y el sometimiento exclusivo del órgano jurisdiccional a los mandatos de la Constitución. Sus competencias del Tribunal Constitucional se pueden resumir en cuatro segmentos: 1) Asuntos sobre inconstitucionalidad de leyes, Estatutos Autonómicos, Cartas Orgánicas, decretos, ordenanzas y resoluciones no judiciales, 2) Conflictos de competencias entre Órganos del Estado, 3) Revisión

de acciones de libertad, Amparo constitucional, Protección de Privacidad, Acción Popular y de Cumplimiento y 4) Los conflictos de competencia entre la jurisdicción indígena originaria campesina y la jurisdicción ordinaria y agroambiental (Artículo 202 de la Constitución).

En el catálogo de principios figura la independencia, como rectoría y trazo inescindible que la jurisdicción constitucional debe aplicar, pero no como una simple sinfonía musical, sino como principio cúspide de respetabilidad y autonomía funcional íntegra e inmune a injerencias. Al respecto, (Duverger:1970) dice que: “La independencia real y efectiva del órgano de control de constitucionalidad, respecto a la jurisdicción constitucional, se refiere a la posibilidad de una independencia que no sea nominal y por el contrario presente una concreción de todas las características y el logro de sus objetivos. Es decir, el órgano de control de jurisdiccionalidad no debe ser influido por otros órganos o poderes en su actividad jurisdiccional”⁴.

Hasta se puede afirmar que, la independencia de los Magistrados dependerá en gran medida, de su propia conciencia y firme integridad, pero desde luego que estará sujeta también a otros factores, los cuales deberán garantizar la libertad del órgano de control de constitucionalidad de toda presión física-psicológica, injerencia o intromisión ajena (pública o privada), que pudiera distorsionar la pureza y objetividad legal y constitucional de las resoluciones o sentencias. Nadie estará obligado a actuar bajo sometimiento obsecuente, porque su libertad jurisdiccional no está enmanillada ni hurtada.

En este contexto, si la Asamblea Legislativa Plurinacional (Congreso Nacional) es sustrato y centro de la democracia encargada de la elaboración de leyes y fiscalización de los órganos del Estado, ¿qué argumentación y debate puede sostener si todos los proyectos de reformas o modificaciones son propuestos por el Poder Ejecutivo (Poder Político) con la fórmula imperativa de aprobación, sin que la minoría opositora de las cámaras merezcan un mínimo de reconocimiento y valoración por la hegemonía y control absoluto que ejerce el poder? ¿Qué rol cumple la justicia constitucional desarrollada por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), si su composición política guarda sintonía formal y sustantiva con el sistema de poder absoluto, donde los márgenes de imparcialidad y objetividad han sido suplantados por la subordinación y verticalidad? Este es un tema que está en debate, pues aquí no se trata de una simple tensión entre la función legislativa y el Constitucional; sino de un “régimen político” que habiendo accedido democráticamente a dirigir los intereses del Estado, a través de convocatorias a Asamblea Constituyentes votan

nueva Constitución (2009) para imprimir supersónicamente un tejido legislativo, judicial y electoral bajo leyes orgánicas y reglamentos que limitan los derechos y libertades de los ciudadanos y tendencialmente por vía fiscal y judicial se distorsiona a la justicia al perseguir a cuanto opositor se anime a fiscalizar, desintegrando los partidos políticos, y en su caso ejerciendo excesivo control constitucional al punto de subrogarse competencias del Constituyente.

A continuación, ¿Cómo se explica que la justicia constitucional desconozca los efectos vinculantes y obligatorios de los resultados de un Referéndum de 21 de febrero de 2016? Y por medio de una demanda abstracta de inconstitucionalidad de facto derogue disposiciones de la Constitución de la cual se entiende que es su guardián, y distorsione la Carta Americana de Derechos Humanos (art. 23 de la CADH) decidiendo que la “reelección indefinida” de quien ejerce el poder es un “derecho humano”. Estamos probablemente ante problemas de altísima intensidad que demandan de una terapia de reivindicación democrática –no interna sino de acción coordinada eficaz regional e internacional-. Vale seguir viviendo en el Estado de Derecho, cuando la sociedad confía y participa en sus instituciones, donde la vida, la libertad y los valores son patrimonio de la humanidad y no de la omnipotencia de magistrados constitucionales que mutilan competencias de otros órganos, hasta con la influencia y consentimiento informado de pretensiones implícitas del poder político.

Ahora bien, si el Estado reconoce la jurisdicción constitucional y el carácter *erga omnes*” a las sentencias que emite el Tribunal Constitucional conforme dispone el artículo 203 de la Constitución⁵, es de reconocer que los Estados americanos en esta misma línea tienen la obligación convencional de cumplir también con el fallo de la Corte IDH que adquiere la calidad de cosa juzgada, porque pone fin a la controversia entre persona y Estado o bien entre Estados; decisión que adquiere vinculación directa y goza de efectos interpartes en la media en que alcanza solo a las partes del proceso, en cuyo caso el Estado queda obligado a cumplir el fallo internacional. (Ortiz: 2017) se refiere a la *res interpretata* del fallo de la Corte IDH. En este rigor conceptual acuña: “Si la cosa juzgada implica la obligatoriedad directa de una sentencia de la Corte IDH por el Estado demandado, la cosa interpretada (*res interpretata*) significa la vinculación objetiva e indirecta que con carácter *erga omnes* tienen los Estados partes de la OEA y, por tanto, las autoridades nacionales, con relación al razonamiento o criterio interpretativo que en algún caso dio la Corte IDH,

máxime si se trata de Estados que han ratificado la CADH y han reconocido la jurisdicción contenciosa de la Corte”.

En un segundo segmento a tomar en consideración, son los Bienes comunes, tomando en cuenta sus perspectivas y la titularidad de los derechos. La protección radicará en los esfuerzos que se realicen por parte del poder público, para que la sociedad boliviana pueda inconformarse en contra de algunas de las decisiones del sistema de gobierno que vulneren estos derechos, y esencialmente las políticas de prevención que se implementen para preservar el uso y disfrute de ríos, manantiales, arroyos, bosques, parques nacionales, tierras y territorios de comunidades indígenas. En trabajos de exploración y explotación minera o hidrocarburífera, así como la apertura de carreteras por sus territorios, el Estado en el marco de la Constitución tiene la responsabilidad de efectuar la consulta previa, libre, obligatoria e informada, de buena fe a los habitantes de las comunidades, obviamente que demandará sea efectuada en su idioma.

1. Nacimiento de Constituciones modernas interregionales

Entre los primeros textos históricos bien llamados precursores de las Constituciones modernas, se tiene: la *Magna Charta Libertatum* inglesa (1215), la Petición de derechos o *Petition of rights* (1628), el *Habeas Corpus* (1679), el Fragmento de Constitución escrita llamada *Bill of Rights* (1689), el Acta de Establecimiento (1701). El conjunto de estos documentos valiosos por su trascendencia histórica y social estaban dirigidos a salvaguardar la existencia humana, esencialmente la *libertad y justicia*. Y la primera Constitución contemporánea que aparece fue la emitida por el Constituyente de Virginia (1776), seguidamente surgió la Constitución Federal de Estados Unidos de América (1787)⁶. En Europa la necesidad de codificación constitucionalista se produjo en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789), en la Asamblea Constituyente de Francia (1790) y que se consolidó en la Constitución de Francia (1793).

A los textos precedentes se debe citar de manera especial a la Constitución de Cádiz (1812), que se irradió a la América del Norte y fue base de la Constitución de México y de otras de la región latinoamericana, hasta llegar al punto culminante del *Constitucionalismo social* con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) y la Constitución de Weimar (1919); seguidamente se incorporaron: Las Constituciones de España (1931), Perú

(1933), Uruguay (1934), Cuba (1940), Brasil (1946), Argentina (1949) y la URSS (1977).

El Constitucionalismo social presentado en sus dos aristas definitorias: sustantivo y adjetivo⁷. La parte sustantiva se refiere al conjunto de cláusulas constitucionales y convencionales (bloque de constitucionalidad/convencionalidad) que componen el capítulo económico de la Constitución, cuyo bloque de normas esencialmente persigue evitar la desigualdad económica entre las personas, combatir la pobreza, asegurar el acceso a los servicios públicos de salud, educación, seguridad social y vivienda, con el objetivo de alcanzar el desarrollo humano; en tanto que la parte adjetiva se integra por los mecanismos institucionales y garantías para lograr el equilibrio entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos sociales y culturales. Estos derechos se encuentran en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que entró en vigor el 23 de marzo de 1976.

2. Justicia Constitucional en Bolivia

El Tribunal Constitucional Plurinacional boliviano es un órgano Constitucional y tiene la misma jerarquía que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) integrada por dos cámaras: senadores y diputados (36 senadores y 130 diputados), el Órgano Electoral o Tribunal Supremo Electoral (7 vocales) y el Poder Ejecutivo (20 ministerios), el Presidente Juan Evo Morales Ayma, es Presidente del Estado Plurinacional, es la máxima autoridad del gobierno (EL MAS), es Comandante y Jefe de las Fuerzas Armadas y Presidente vitalicio de las seis Federaciones de cocaleros del Trópico de Cochabamba y lleva más de trece años en el gobierno ¿cómo se explica si el artículo 168 de la Constitución le confiere el derecho de ser reelegido por una sola vez, una vez cumplido su primer mandato?, cuestión a ser analizada más adelante.

Entre todos los órganos del Estado rigen como principios rectores: la coordinación y cooperación, en la perspectiva de que las tareas y competencias sean eficaces en sus ámbitos respectivos que la Constitución les confiere; de este modo el relacionamiento de los distintos órganos constitucionales debe caracterizarse por el respeto recíproco, mutuo, así sus decisiones serán ponderadas y aceptadas por la sociedad, para ello es necesario alejar el tráfico de influencia, la injerencia, la presión y la coacción, y cuando no cancelar la corrupción y principalmente la “subordinación” al poder político, aunque corran el riesgo de ser amenazados con procesos penales insustentables. En definitiva, se descompone el tejido democrático si la acción de uno de ellos, se

desplaza rebasando límites legales-constitucionales, asumiendo determinaciones que quizás son de exclusividad de tribunales departamentales o nacionales.

El Tribunal Constitucional vela por la supremacía de la Constitución, ejerce el control de constitucionalidad y precavete el respeto de los derechos y garantías constitucionales y son elegidos mediante sufragio universal, bajo modalidad departamental (los 9 Magistrados representan a cada uno de los departamentos) por un periodo de seis años. Pero, si las autoridades públicas incurren en la prohibición constitucional de instigar o consentir toda forma de tortura, desaparición, confinamiento, coacción o cualquier violencia física o moral, así sea por acciones sobrevinientes a su posesión y ejercicio en sus funciones, “serán destituidos”, sin perjuicio de las sanciones determinada por ley. Verbigracia el 11 de marzo de 2019, sucedió un hecho de violencia física y moral protagonizado por el Magistrado Orlando Ceballos Acuña contra su esposa, causándole las lesiones impedimento por siete días, según informe del médico forense; el pleno del Tribunal Constitucional le concedió licencia sin goce de haber por diez días. Ante semejante hecho reprochable cabe preguntarse ¿cómo la justicia constitucional puede estar en manos de un Magistrado que se supone es garante de los derechos humanos?, en mi entender debería renunciar y si no lo ha hecho al tener imputación penal debería cesar en sus funciones por el peligro que entraña. Pero, como la afinidad al régimen de gobierno de los Tribunales es visible al haber sido cooptado, poco o nada les interesa tomar la mejor decisión legal, aplicando simple y llanamente el artículo 114 de la Constitución que prevé la destitución inmediata.

Su estatus de Órgano Constitucional describe el hecho de que el Tribunal Constitucional Plurinacional debe ser efectivamente independiente y con autonomía funcional para cumplir las atribuciones señaladas en el artículo 202 numerales 1 al 12 de la Constitución, así como aplicar los tratados y convenios internacionales ratificados por la Asamblea Legislativa Plurinacional que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los Estados de excepción prevalecen en el orden interno. Esto es, que los derechos y deberes consagrados en la Constitución de 2009, se interpretarán de acuerdo a los tratados internacionales de derechos humanos y demás convenciones universales. Cabe complementar a su vez, que los derechos que proclama la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos no constitucionalizados; además que se debe mantener la praxis de asegurar el cumplimiento de las declaraciones, resoluciones y sentencias constitucionales, con el rigor imperativo de responsabilidad en caso de incumplimiento por los órganos o tribunales infra.

En el Estado de derecho, es esencial e imprescindible la limitación del poder político o de gobierno por un Tribunal Constitucional autónomo, que en cúspide tiene rango constitucional, y es por esta categoría que está en condiciones no sólo de dirimir los conflictos de competencias entre órganos, sino hasta en circunstancias que así se presentaren, de enfrentarse en su caso, “con sus pares constitucionales nacionales”, despliegue que no implica de ninguna manera la permisión interpretativa tergiversada de los derechos humanos contenidos en la Carta Americana de los Derechos Humanos (CADH) y otros instrumentos internacionales.

Entre los servicios públicos y que son imprescindibles de garantizar por los Estados y ocupando un lugar especial en las Constituciones de los países y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el “derecho a la justicia” en condiciones de igualdad material de acceso de los ciudadanos (arts. 1, 7, 8, 9, 10, 11, 12 de la DD.HH), máxime si se considera que los derechos subjetivos son intereses de las personas reconocidos por una norma jurídica generalmente de rango constitucional, legal, y están garantizados o tutelados en sede judicial por los jueces, porque un derecho sin garantía no existe en términos teórico-conceptual o, es un fraude del legislador. El Poder político, si bien tiene acceso a la justicia; sin embargo, desde la perspectiva del garantismo judicial, debe evitar prácticas de judicialización de la política, desplazando problemas que pueden tener solución por naturaleza y finalidad en sede política o de la administración, como sería censurable que se pretenda “politizar la justicia” obteniendo decisorios en asuntos de interés y beneficio directo del régimen político o autoridad visiblemente del sistema de poder.

La tendencia manifiesta de los tribunales de justicia así como del Constitucional de favorecer en toda acción promovida por el Estado, se plasma en la sentencia SCP 0907/2016-S3 emitida por la Sala Tercera del Tribunal Constitucional Plurinacional, que reconoce el derecho del pre-aviso a favor de los trabajadores en situación de anuncio de despido; sin embargo ante la reacción de la Central Obrera Boliviana (COB), mineros y trabajadores de los distintos gremios consideraron que la sentencia violaba sus derechos sociales a la estabilidad laboral y seguridad social de sus familias, tal fue el grado de presión que al cabo de los siete meses el Tribunal Constitucional en sala plena y a instancia del Defensor del Pueblo que planteó demanda abstracta de inconstitucionalidad del artículo 12 de la Ley General del Trabajo (LGT) y artículo único del Decreto Supremo N° 6813 (DS), emitió nueva sentencia constitucional la SCP 009/2017 de 24 de marzo de 2017, mediante la cual deja sin efectos legales a la anterior decisión, con el argumento central que: “la estabilidad laboral es un derecho fundamental que consagran los artículos 46.1.2

y 49.11 de la Constitución Política del Estado (CPE) y el Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) de junio de 1982, y que la figura del preaviso faculta la conclusión de una relación laboral por el simple arbitrio del empleador”. Por tanto, expulsa del ordenamiento jurídico el preaviso laboral. Guillermo Escobar Roca en su análisis al derecho al trabajo considera que podrían quedar muchas necesidades básicas sin cubrir, habida cuenta que el derecho al trabajo (que si tuviera una titularidad realmente universal, permitiría un ingreso básico para todos), entendido como el derecho a obtenerlo para llevar una vida digna, no puede ser considerado un derecho fundamental.

Se advierte también, la tendencia de reconocer con amplitud nuevos derechos fundamentales fuera de los clásicos como: el derecho al agua, seguridad alimentaria, la madre tierra, el medio ambiente saludable, internet, la salud, entendido como un sistema único, universal, gratuito, equitativo con calidez y el derecho a la libre autodeterminación de los pueblos indígenas (36 nacionalidades) dentro de sus respectivos territorios ancestrales; sin embargo, los derechos fundamentales a la estabilidad al trabajo y seguridad social que se hallan comprendidos en el Título II, Capítulo V, Sección III, artículos 46.1.2 y 49.11 de la Constitución, no han dejado de ocupar un sitio preferente en la protección del Estado; aunque con ciertas controversias en sus políticas regulatorias; paradójicas a la justicia constitucional recogida en la SCP 009/2017 de 24 de marzo, debido a que más de un centenar y medio de jueces fueron despedidos por el Consejo de Magistratura, bajo el argumento que todos los funcionarios públicos ingresantes al órgano judicial durante la vigencia de la Constitución abrogada y leyes laborales de la República se consideran “personal de libre contratación” y por tanto, pueden ser rescindidos en su vínculo con el Estado, sin que ello se interprete como vulneración al derecho fundamental al trabajo. Este caso emblemático configura una desprotección total a las garantías no solo de estabilidad laboral, sino a la seguridad social, porque esta última es la seguridad de vivir sin necesidades económicas graves. Aquí nuevamente, se patentiza la violación de la dignidad de la persona producida por la desocupación e incertidumbre que conduce incluso a vivir en subempleo o bien en pobreza. Por ello considero que hay necesidad de diseñar de forma independiente el “derecho al trabajo digno, seguro y continuado” y el “derecho a la seguridad social”, introduciendo los mecanismos constitucionales que den garantía a la efectividad de los valores que contienen cada derecho.

La referencia a las decisiones constitucionales, lógicamente que no estarán exentas de críticas por los doctrinarios y principalmente por la clase política, si instituciones como el Tribunal Constitucional Plurinacional en sus amplísimas atribuciones no sólo debe atenuar las tensiones, sino que debe vivir

frecuentemente con agudos cuestionamientos desde distintos ángulos hasta llegar al centro de un diálogo jurídico constitucional constructivo, reflexivo y positivo, que permita corregir y afinar la coherencia en los razonamientos inevitables. La tormenta será mayor si el constitucional se aleja de la imparcialidad y objetividad impulsado por la complacencia al sistema de gobierno, a fin de honrar lealtades por el voto recibido; en cuyo caso estaríamos ante “jueces al servicio de la política” y no ante “jueces constitucionales al servicio de la justicia de los derechos y las libertades”.

3. Los Vocales constitucionales en Bolivia: justicia indígena originaria campesina

Por primera vez en la historia de Bolivia las Salas Ampliadas del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), procedieron a la elección y designación de 30 Vocales Constitucionales para desempeñar funciones en los nueve Distritos Judiciales Departamentales que tiene el país, faltando por designar 14 Vocales con los cuales se completaría a 44 Vocales.

El proceso de selección de los postulantes estuvo bajo responsabilidad del Consejo de la Magistratura (CM) y la designación por el Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo de Justicia, se basó en criterios meritocráticos, la posesión de los 30 Vocales se produjo el 13 de febrero de 2019 en la ciudad de Sucre. La oposición cuestionó el nombramiento de varios de ellos por haber ocupado cargos jerárquicos en la administración pública en vigencia del actual sistema político del Movimiento al Socialismo (MAS partido de gobierno). Este cuestionamiento se realizó también en la selección y designación que hizo la Asamblea Legislativa Plurinacional con relación a los Magistrados actuales del Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo de Justicia, son sombras que hasta la fecha no han sido despejadas por el poder político de gobierno, que sin duda demerita la labor jurisdiccional.

La función constitucional que ejercen los 30 Vocales distribuidos en 22 de Salas en las nueve Capitales del Departamento del país, se concentran en el conocimiento de las: Acciones de Libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Acción Popular; sus resoluciones serán elevadas en revisión ante el Tribunal Constitucional y en su regulación estarán sujetos a la Constitución, La Ley del Tribunal Constitucional de 6 de julio de 2010 y el Código Procesal Constitucional de 5 de julio de 2012, Código que tiene por objeto regular los procesos constitucionales ante el TCP, así como las acciones de defensa ante juezas, jueces y tribunales.

Desde mi visión y propuesta que la expuse en la Cumbre Nacional de la Justicia realizada en julio de 2016, en la ciudad de Sucre, Los Vocales Constitucionales deberían cubrir las demandas constitucionales de las acciones de garantías no sólo en las Capitales de Departamento, sino también en ciudades intermedias densamente pobladas, si la finalidad de la justicia constitucional era aproximar a los ciudadanos para que éstos pudieran acceder con inmediatez a la jurisdicción constitucional, así como la ponencia remarcaba que en caso que los Jueces o Vocales Constitucionales tutelén los derechos de los demandantes, sea en acciones de libertad, Amparo Constitucional, Protección de Privacidad, de Cumplimiento y Acción Popular, la “decisión constitucional” dictada en sede judicial departamental, no tendría sentido que vaya en “revisión” ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que tiene su sede en Sucre-Capital de Bolivia; máxime si las decisiones constitucionales en acciones de garantía se ejecutan inmediatamente por los Vocales Constitucionales, y solamente deberían recibir la “revisión” cuando las decisiones sean de denegación a la tutela. Además, en criterio de (Gareca: 2017) la ponencia tenía su justificación primordial, en el hecho de que el Tribunal Constitucional la mayor carga procesal que tiene es precisamente, por las revisiones constitucionales, dicha carga alcanza al 76% según informes de rendición de cuentas del propio Tribunal Constitucional de la gestión 2018. Entiendo que en próximas reformas es posible que se acoja la propuesta en su verdadera dimensión y así concretar una justicia constitucional inmediata, eficaz y desgestionante del Tribunal Constitucional.

3.1 Justicia indígena originaria campesina

El orden normativo boliviano reconoce la existencia constitucional de 36 nacionalidades. El constituyente se inclinó por la creación de la justicia comunitaria, denominada propiamente “Justicia indígena originario campesino”, siendo que según el censo de población de 6.916.732 habitantes (mayores de 15 años) 4.032.014 no se consideran indígenas. Apenas 1.281.116 se autodefinen como quechuas y solo 1.191.352 como aymaras.

Así, las autoridades responsables por los juzgamientos poseen el mandato amparado en la Constitución, para el ejercicio de la justicia en sus respectivas comunidades, aplicando los principios y las garantías fundamentales en un Estado de Derecho Plurinacional Comunitario. Por otra, el procedimiento jurisdiccional indígena originario campesino, estará sujeto también al bloque de constitucionalidad, aunque sea permitido juzgar a partir de sus naturales principios, usos, costumbres, normas, valores y mecanismos propios; proceso que permitirá que las controversias sean de índole personal,

material y territorial, puedan ser solucionadas dentro de sus ámbitos comunitarios. Un elemento importante es que la Justicia comunitaria respeta el derecho a la vida, el derecho a la defensa y demás derechos y garantías establecidas en la Constitución de 2009 (art. 190.II de la CPE); empero no han faltado situaciones de horror, como el caso de Benjamín Altamirano Alcalde aymara de Ayo Ayo, que fue flagelado y quemado en plena plaza en junio de 2014.

Tratando de desentrañar la filosofía de la jurisdicción comunitaria, se destaca que la justicia indígena originario campesino se regula en base a la Constitución (artículos 190.I.II, 191. I. y II, numerales 1, 2, y 3 , y 192. I. II. Y III de la CPE); la Ley N° 1257 que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley N° 3897 que eleva a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales de Derechos Humanos aplicables, bajo los principios de descolonización, coexistencia, complementariedad y equidad.

Como consecuencia de ello y en opinión de (Junior: 2017), la Ley de demarcación jurisdiccional Ley N° 073 de 29 de diciembre de 2010, también trata de regular las cuestiones dispuestas en la Constitución Política del Estado entre la jurisdicción indígena originario campesino y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente (jurisdicción ordinaria, jurisdicción agroambiental y jurisdicción constitucional. Es a partir de ahí, que fijará las posibilidades de cooperación entre las mismas en el marco del pluralismo jurídico, con todo se persigue el cumplimiento de sus decisiones valiéndose del concurso de las autoridades administrativas y jurisdiccionales.

En cuanto al tema de sus decisiones, solamente el Tribunal Constitucional podrá reconocer y reformar sus determinaciones que se hacen en asambleas y cabildos conforme dispone el artículo 202 de la Constitución. Es decir, el sistema de justicia ordinaria debe tener el mismo peso que el sistema de justicia indígena en el debate doctrinal, y esta última no debe subsumirse a la aplicable a los ciudadanos de las urbes.

Por otra parte, en algunas comunidades, después de la sentencia condenatoria, optan por establecer penas tales como latigazos en plaza pública; hacer 1000 adobes (sanción impuesta por la Comunidad de Santiago de Llalagua a Félix Patzy actual Gobernador de la ciudad de La Paz el 2010, por conducir vehículo en estado de ebriedad estando en función de Ministro de Educación). También se dan penas caracterizadas por agresión física y psíquica de los condenados reproduciendo opresiones históricas como aquella registrada en la Localidad de Apolo, en la que una niña adolescente después de quedar embarazada y sufrir todo tipo de rechazo en la comunidad y la escuela, le

arrancaron el feto de cinco meses que fue quemado en plaza pública como pena comunitaria, en situación semejante otra adolescente al no soportar la presión de la comunidad tomó la decisión de suicidarse; hechos que fueron relatados en la Conferencia sobre los 40 Años del Manifiesto de Tiwanaku en la ciudad de La Paz. También, no está ausente la práctica de hacer justicia por sus propias manos, tal como lo sucedido en la población de Ibirgazama los comunarios decidieron amarrar a quemar a un ladrón en noviembre de 2016 y en la Localidad de Toro Toro quemaron a vivo al presunto autor del delito de violación a una niña, hecho ocurrido el 26 de febrero de 2017.

En este panorama tan deplorable y violatorio de Derechos Humanos, por más que la Ley de demarcación jurisdiccional prohíba cualquier tipo de linchamiento, violación contra niñas, adolescentes o mujeres mayores y la pena de muerte, el Estado revela que no posee instrumentos de verificación eficientes para identificar si, de hecho, esas cuestiones regulatorias son cumplidas en las comunidades donde se aplica la jurisdicción indígena originario campesino⁸. A su vez, observar si en la jurisdicción indígena originario campesino no se violan los principios de legalidad y de retroactividad de la ley, puesto que todos los órganos del Estado están sometidos a esos principios básicos en el ejercicio jurisdiccional, su omisión no podría ser justificado ni siquiera a título de una estructura intercultural. El primero exige para juzgar y castigar la existencia previa de una ley y así garantizar la objetividad en el comportamiento punible y el segundo (retroactividad) según la visión de (Yáñez: 2017) “La aplicación retroactiva de cualquier norma penal perjudicial (sea material, procesal o de ejecución), no se sostiene jurídicamente desde la historia del Derecho Constitucional y penal que veda esa posibilidad para constituir un grave exceso contra los derechos de la persona por parte del Estado, tampoco desde la interpretación global de la nueva CPE de Bolivia.

Ahora bien, ninguna mantención de usos y costumbres justifica la supresión de la vida humana como pena impuesta, aunque la valoración de la vida psico-social varíe de una comunidad a otra, sea en “comunidades indígenas” o en los llamados países industrializados como Estados Unidos, que aplican la pena de muerte sin grandes cuestionamientos. Por tanto, al analizar las secuelas de estas prácticas regresivas, queda evidente que el proyecto concebido en Bolivia –no como República-, sino como Estado Plurinacional, con su hija la “Justicia comunitaria”, sin duda que en lo formal y sustancial no sustenta cualquier principio violador de la vida y los derechos humanos consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 3

de la DD.HH); de la Carta Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 6 de la CIDCP) y de la Carta Americana de los Derechos Humanos (artículo 4 de la CADH).

4. Referéndum: Referencias históricas europea y latinoamericana

Hasta hace muchos años hubiera sido impensable para los cultores de las ciencias jurídicas y del derecho internacional en particular imaginar que las directrices emitidas por entes como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su par la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), podrían meterse en la corriente sanguínea de los países de América, con la fuerza como para trastocar sensiblemente las normas legales. Hasta podemos recordar que a partir de 1989 es visible una comunidad mundial, en la que los textos constitucionales y resoluciones judiciales se vuelven objeto de los procesos de globalización; con ello hay recepción e intercambio de diálogos constitucionales, y particularmente, de nuevos mecanismos de participación directa en la conformación de las instituciones con el paradigma constitucional de la “independencia de los poderes”.

En este sentido, resulta oportuno hablar de la participación directa en democracia, “El Referéndum” concebido como mecanismo idóneo de consulta, para que los ciudadanos de un Estado hagan uso de su derecho político dentro del marco y dimensión que la otorga la Constitución y las leyes, cuyos resultados al margen de ser públicos por el Tribunal Electoral (TSE) como órgano regulador, están garantizados en su cumplimiento por el carácter de obligatorio, vinculante e inmediato, caracterizaciones intrínsecas que hacen a su composición y finalidad democrática en un Estado de Derecho.

En el marco de una reseña histórica ¿cómo resolvió el Tribunal Federal Alemán el Referéndum de Baviera?, la decisión fue de “denegación de secesión” (diciembre de 2016), bajo el argumento de que la República de Alemania es un Estado Nacional, basado en el poder constituyente del pueblo alemán; por ello, ni los Estados ni los gobiernos son los dueños de la Constitución y ninguna aspiración política puede estar por encima de ella y menos mutarla.

Por su parte el Tribunal Constitucional español en la STC 42/2014, establece que la secesión no está reconocida en la Constitución de 1978, pero es una aspiración política legítima a la que sólo puede llegarse mediante un proceso legal constitucional. El Referéndum facultativo (artículo 92 CE) de la Constitución solo ha sido utilizado en dos ocasiones: verbigracia, la convocatoria para establecer la permanencia de España en la OTAN y la Aprobación del Tratado Constitucional para la nueva Constitución Europea.

Lo ideal sería que cada Carta Fundamental fijara un catálogo de materias a consultar.

Ampliando lo anterior, el Referéndum de independencia de Cataluña de 2017, fue un Referéndum de autodeterminación convocado por el gobierno de Catalunya, pero suspendido por el Tribunal Constitucional el 7 de septiembre de 2017, y finalmente celebrado en forma ilegal el 1º de octubre de 2017. Por gestiones del gobierno del entonces presidente Mariano Rajoy el Referéndum fue declarado inconstitucional por unanimidad de los magistrados del Tribunal Constitucional el 17 de octubre de 2017, al entender que la ley del parlamento de Catalunya invadía competencias estatales, vulneraba la supremacía de la Constitución, la indisoluble unidad de la Nación española y la soberanía popular⁹.

En el Reino Unido en 1975 se celebró el primer Referéndum con el resultado de seguir permaneciendo a la Unión Europea, decisión que fue respetada por la población inglesa. El segundo Referéndum fue convocado el 23 de junio de 2016 y el pueblo votó por la salida de la Unión Europea con un 51,9%. Tras conocerse los resultados el Primer Ministro David Cameron anunció la dejación de su cargo, por considerar que la permanencia en la Unión Europea (UE) amplifica el poder del Reino Unido y consecuentemente con su posición política renunció al cargo. La actitud de Camerón es un mensaje histórico de democracia y respeto a la voluntad popular. Actualmente, una gran mayoría de los ciudadanos están pidiendo retornar a la UE y los Lores consideran sí se convoca a un nuevo Referéndum.

El domingo 25 de noviembre de 2018 Suiza ha tumbado en Referéndum una iniciativa planteada por la Ultraderecha para anteponer la Constitución Suiza al Derecho Internacional por 66,2 % a 33,8 %. También se ha rechazado subsidiar a las ganaderías para frenar prácticas en descornar al ganado, 54,7 % contra 45,3 %.

En Canadá en 1980 fue promovido el Referéndum por el gobierno de la Provincia de Quebec, para impulsar un proceso tendente a obtener la independencia respecto a Canadá. No se votaba a favor o en contra de la independencia, sino acerca de si se autorizaba o no al gobierno de la provincia a “intentar negociar un acuerdo con el resto de Canadá por el que Quebec obtendría su plena soberanía”, manteniendo al mismo tiempo un acuerdo de asociación con el resto del Estado. La votación se celebró el 20 de mayo de 1980, el resultado arrojó 45% por el sí (desfavorable a la independencia) y 59,56 % por el No.

El segundo Referéndum se realizó el 30 de octubre de 1995 de la Provincia de Quebec para preguntar a los votantes si deseaban separarse de Canadá y convertirse en un Estado independiente (soberano). El resultado tradujo 49,42 % por el Sí (desfavorable a la independencia) y 50,58 % por el No a la separación.

Poniendo el lente en América, en Venezuela mediante un segundo Referéndum de 15 de febrero de 2009, se incorporó en la Constitución la “Reelección del presidente cuantas veces fuera y en forma indefinida”. Esta fórmula de perpetuarse en el poder sin respetar la Constitución mantiene al país más rico de América en la profunda crisis donde las libertades se han cancelado, crecen las detenciones arbitrarias y el éxodo de ciudadanos venezolanos hacia el exterior (más de cinco millones) y donde existen dos presidentes: Juan Guaidó reconocido por más de 50 países y el Grupo de Lima que es “Constitucional al ser nombrado por la Asamblea Legislativa” y Nicolás Maduro “el usurpador”, por haber surgido de elecciones nada transparentes. La Comunidad mundial deberá reforzar al máximo sus esfuerzos para la reivindicación de la democracia; pues no se puede tolerar que en una población indefensa se cometan delitos de lesa humanidad, asesinatos, torturas, desapariciones, detenciones arbitrarias, agravando su situación de falta de alimentos, medicamentos y los servicios de luz indispensables para la condición de vida humana. Cabe preguntarse ¿Los líderes de la comunidad mundial emprenderán por construir un mecanismo de dimensión universal y humanitario de reacción rápida y eficaz para salvar las vidas, libertades y la democracia en cualquier región del planeta? El escepticismo tiene que cancelarse para siempre ante atrocidades cometidas por sistemas dictatoriales, megalómanos y hasta pirómanos.

En Nicaragua siguiendo las prácticas populistas de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, el presidente Daniel Ortega apeló a la Asamblea y al Consejo Supremo Electoral para reformar la Constitución el 29 de enero de 2014 y así garantizar su permanencia indefinida en el poder. En Honduras mediante la Sala Constitucional y el Tribunal Electoral y pese a la prohibición de la Constitución se aprobó la “Reelección indefinida del mandatario Juan Orlando Hernández” en diciembre de 2017, y en Ecuador la realidad muestra una mejor perspectiva democrática, porque el Presidente Lenin Moreno mediante Referéndum de 5 de febrero de 2018, logró que la voluntad mayoritaria del pueblo “elimine la reelección indefinida” introducida por Rafael Correa en diciembre de 2015.

4.1 Precedentes Constitucionales que rechazan la Reelección indefinida

La jurisprudencia en el problema de la reelegibilidad indefinida de presidentes en Bolivia no existe, como tampoco hay una regulación constitucional que reconozca la figura de continuidad permanente en el poder, más allá de los límites constitucionales que establece el artículo 168 de la Constitución.

Solventando lo anterior, El Tribunal Constitucional en la sentencia SC 0045/2006 que toma como precedente la SC 0075/2005, argumenta que por imperio del artículo 203 de la Constitución, la jurisprudencia es vinculante y de cumplimiento obligatoria: “ninguna autoridad puede oponerse a lo determinado por el pueblo, mediante la exteriorización de su decisión en Referéndum”. Esta regla puede servir para reforzar la constitucionalización de los efectos que tiene el mecanismo democrático de participación directa.

En la República Dominicana el Tribunal Constitucional decidió “rechazar la reelección indefinida” que pretendía el presidente Danilo Medina, el 30 de agosto de 2018. Al considerar que ninguna regla de la Constitución y menos los tratados de derechos humanos la aprueban.

En la República del Perú a instancia de una demanda abstracta de inconstitucionalidad, el Tribunal Constitucional mediante sentencia de 10 de octubre de 2018, decidió que “la reelección no es un derecho humano”, y que el derecho a ser reelegido no es absoluto y admite límites. Por tanto, basándose en el Informe de Venecia N° 908/2018 negó la reelección para Alcaldes, Concejales en el Perú.

En la perspectiva de (Gareca: 2017), apunta que “toda interpretación debe guardar relación con la regla sometida a escrutinio en base a principios y valores”. En tal sentido la Comisión de Venecia en su informe N° 908/2018 (IV), de 20 de marzo de 2018, a pedido del Secretario General de la Organización de Estados Americanos (OEA) Luís Almagro dice: “La reelección indefinida de autoridades no es un derecho humano y que impedirla no limita los derechos de los candidatos o de los votantes”. El informe al interpretar el artículo 23 de la Carta Americana de Derechos Humanos (CADH), objeto de la consulta promovida por la máxima autoridad de la OEA, tiene la ventaja de aportar mayor seguridad al tema de la –no reelegibilidad de presidentes–, por cuanto no es lo mismo que un tribunal utilice la justicia como elemento interpretativo a que la utilice mediante su concreción en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

El viernes 19 de abril de 2019 senadores de Estados Unidos de Norteamérica (EE.UU), en conocimiento que Evo Morales es el mandatario con más tiempo en el poder en la historia de Bolivia desde el 22 de enero de

2006, actualmente aspira a un cuarto mandato consecutivo (2019-2025), tras determinar el Tribunal Constitucional Plurinacional mediante SCP 0084/2017 que tiene derecho a una reelección indefinida. Sobre el tema el senador Bob Menéndez presidente de la comisión de Relaciones Internacionales, instó a Evo Morales a no presentarse en las elecciones generales y respetar los límites de los mandatos constitucionales. Sentenció que “cualquier líder electo que intente extender su control del poder al eludir la propia Constitución del país no es democrático”. De otro lado, el senador Dick Durbin consideró que: “La Paz debe respetar los límites del mandato presidencial y romper con el desacreditado modelo de líder vitalicio visto solo en los pocos Estados fallidos de la región (Venezuela, Nicaragua).

4.2 El Referéndum en Bolivia y la fraudulenta sentencia constitucional 0084/2017

En Bolivia, la actual crisis de la democracia participativa está determinada en gran parte por el desvanecimiento de la relación entre partidos políticos y sociedad, su alejamiento es notorio y quien llega al poder como el actual régimen de gobierno del MAS (13 años y siete meses), se han estatizado, cooptando todos los poderes del Estado, sin respetar la independencia, competencia y atribuciones que señala la Constitución. Y la gravísima cuestión constitucional pasa también por el descrédito y desconfianza del Ejecutivo, Asamblea Legislativa Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia, Fiscalía General de la República, Tribunal Constitucional Plurinacional y Tribunal Supremo Electoral. Tanto es así, que en las elecciones primarias forzadas de 27 de enero de 2019, para legitimar la reelección ilegal de Evo Morales el 2019, el binomio del MAS logró apenas el 40% de su militancia inscrita, es decir, que la abstención fue el voto prevalente de rechazo, lo que significa que de más de seis millones de ciudadanos habilitados a las urnas según el padrón electoral espurio, el 85% del electorado nacional rechazan su candidatura.

Ante esta deslegitimación superlativa de la base social del régimen de Evo Morales, creemos que es necesario introducir la rígida incompatibilidad entre cargos de partido y cargos públicos, incluidos los electivos, así se alejaría las sombras de la presión a los funcionarios públicos de fidelidad política en procesos electorales, y merced a ello, también promover la alternancia como derecho de la democracia que la Constitución de 2009 consagra en su art. 168.

4.3 Razonamientos jurídicos ilegales de la SCP 0084/2017

Así pues, se entiende que existen “20 razonamientos jurídicos” que son fuente de REELECCIÓN ILEGAL E INCONSTITUCIONAL del binomio

Evo Morales Ayma y García Linera en las elecciones primarias y generales de 2019, que merecen ser considerados por la Comisión IDH y la Corte IDH con criterios de oportunidad, urgencia y ponderada valoración respecto a la opinión consultiva de interpretación del artículo 23.1.b de la CADH., tomando en cuenta que la interpretación del sistema supranacional prevalece sobre la alegación del derecho interno¹⁰.

1. El proyecto de Constitución elaborado por los constituyentes como política del MAS., al entrarse, el voltaje de tensión se bajó y concilió gracias a los garantes de los países de Brasil y Colombia en 2008. Entonces la primacía del diálogo con los actuales presidentes está abierta, pero ¿qué se precisa? voluntad política diplomática y agilizar la opinión consultiva.

2. La nueva Constitución fue sometida a Referéndum el 25 de enero de 2009 y fue aprobada con el 61,4 % y entró en vigencia el 7 de febrero de 2009. Referéndum que fue respetado por los actuales gobernantes y todos los ciudadanos de Bolivia.

3. La Constitución en Disposiciones Transitorias Primera, párrafo II, expresa: “Los mandatos anteriores a la vigencia de esa Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos períodos de funciones”. Evo Morales acorta su mandato y valiéndose de una ley de aplicación democrática empieza un nuevo periodo (2006-2010) bajo reglas de la nueva Constitución, periodo interpretado por el Tribunal Constitucional (adelante TCP) como el primero por tratarse del nuevo Estado Plurinacional (no obstante que Evo Morales se comprometió a respetar el mandato de gobierno bajo la Constitución abrogada). Posteriormente, antes de cumplir su segundo mandato de gobierno (2010-2015) Evo Morales promueve consulta al TCP y el Órgano guardián de la Constitución mediante una interpretación espuria y tergiversada emite la Declaración Constitucional 003/2013 de 25 de abril, “autorizando la reelección de Evo Morales por tercera vez” en contra de la disposición constitucional transitoria y del artículo 168 de la Constitución (periodo 2015-2020). Aquí se da la primera ruptura de la Constitución y por seis magistrados subordinados al régimen.

4. El artículo 168 de la Constitución de 2009, permite la reelección por una sola vez de manera continua. Es decir, que el constituyente ha establecido límite no más allá de los ocho años en el ejercicio de presidente (a) y vicepresidente (a); límite que no puede interpretarse como violación a los derechos humanos y menos a quienes ejercen el poder, si la justificación

democrática está en la primacía de la alternancia que es lo que promueve la CADH.

5. Nuevamente, aplicando la fórmula que les dio resultado (antes de cumplir su mandato), a iniciativa del partido de gobierno (MAS) la Asamblea Legislativa Plurinacional con mayoría de 2/3 convocó a Referéndum el 21 de febrero de 2016, proceso que fue organizado y controlado por el Tribunal Supremo Electoral (adelante TSE). La pregunta redactada por el TSE dice: “Usted está de acuerdo con la reforma del artículo 168 de la Constitución Política del Estado Plurinacional para que la presidenta o presidente y las vicepresidenta o vicepresidente puedan ser reelectas o reelectos por dos veces de manera continua” SI o NO, pregunta que fue consultada y aprobada por los magistrados: Zenón Hugo Bacarreza Morales, Macario Lahor Cortez Chávez, Efren Choque Capuma. Mirtha Camacho Quiroga, Juan Osvaldo Valencia Alvarado, Ruddy José Flores Monterrey y Neldy Virginia Andrade Martínez; es decir los mismos que dictaron la Declaración Constitucional 003/2013.

6. En el Referéndum 21 f ganó el NO a la reforma del artículo 168 de la CPE, porque votaron 2.682.517 que representa el 51,3% de ciudadanos bolivianos que le dijeron no a la reelección indefinida de Evo Morales Ayma, frente al 49,7% que dijeron SI. Resultados que fueron públicos por la presidenta del TSE Kathya Uriona el mismo día del acto democrático y el presidente del Estado se comprometió a respetar.

7. Como el Referéndum les fue adverso, por iniciativa de la senadora Nélida Sinfuentes, diputados del MAS., y las federaciones de cocaleros del trópico de Cochabamba se promovió ante el TCP demanda abstracta de inconstitucionalidad de los arts. 156, 168, 285.II y 288 de la Constitución en su frase: “por una sola vez de manera continua” y de artículos de la Ley del Régimen Electoral vinculantes con la temática. El Tribunal Constitucional Plurinacional dicta la SCP 0084/2017 de 28 de noviembre “Autorizando la reelección indefinida de Evo Morales, Álvaro García Linera y demás autoridades electas en urnas”, decisión fraudulenta porque interpreta erróneamente el art. 23.1.b de la CADH, normativa internacional que no reconoce “derecho humano a quienes ejercen el poder” por cuanto el límite es para el gobernante en ejercicio del cargo y no al derecho político a elegir y ser elegido. Por tanto, no existe la cualidad prevalente de aplicación de la CADH respecto a los artículos referidos que han sido retirados en la frase: “por una sola vez de manera continua”. Nítidamente el TCP actúa contra el artículo 202.I de la Constitución al no estar prevista la acción abstracta de inconstitucionalidad contra artículos de la propia Constitución.

8. El Tribunal Constitucional vulnera el art. 23.1.b. de la Convención, porque la primacía interpretativa del contenido y alcance por rango en casos de violación de derechos humanos, le corresponde a la Corte IDH.

9. El TCP en el plano interno, como guardián de la Constitución omite velar por el principio básico de supremacía de la CPE y por consiguiente viola el artículo 196.I de la Carta Fundamental de 2009, inventando perversamente una prevalencia inexistente de la CADH.

10. El TCP al dictar la SCP 0084/2017 carece de atribuciones para fungir de legislador positivo, por cuanto la modificación de cualquier artículo de la Constitución como el caso del artículo 168 CPE, solo puede darse por ley de reforma constitucional aprobada por 2/3 de miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Cualquier reforma constitucional necesitará Referéndum constitucional aprobatorio conforme dispone el art. 411.II de la CPE.

11. La SCP 0084/2017 en la ratio decidendi, omite argumentar el carácter obligatorio y vinculante del Referéndum de 21 de febrero de 2016 (R21f) y por ser exprefesa e insidiosa los magistrados dado su rango violan los arts. 1, 7, 9.2.4 y 196.II de la Constitución; es decir que prescinde de la voluntad del constituyente y la revisión de documentos, actas y resoluciones.

12. El Órgano garante de la Constitución se sustrae deliberadamente de reconocer la supremacía del Referéndum 21 f, en esencia “expresión democrática”, y subsecuentemente, en su argumentación elude la eficacia que le confiere el art. 15 de la Ley 026 del Régimen Electoral. Este es otro de los componentes que configura el fraude en la que incurre el TCP, olvidando que ellos vienen elegidos de un proceso democrático mínimo al fin, pero jamás comparable a los 2.682.517 de ciudadanos que dijeron no a la reforma del artículo 168 de la CPE.

13. Ninguna Resolución constitucional puede estar por encima de la soberanía popular del pueblo de Bolivia contenida en el valor del Referéndum 21f, si la democracia es un valor universal que no admite que un interés individual de un gobernante este por encima de ella, eso es dictadura.

14. No existe ningún Tribunal Constitucional en el mundo que actúe arbitrariamente, desconociendo que la dignidad humana de los ciudadanos, la democracia y la Constitución son categorías determinantes del Estado de derecho. Pero lamentablemente el TCP se encumbra en la cúspide jurisprudencial censurable desde toda perspectiva constitucional y dogmática.

15. Los seis magistrados firmantes de la SCP 0084/2017 son reincidentes en su desborde interpretativo constitucional, al haber conocido y resuelto una consulta de la Disposición Transitoria Primera, parágrafo II de la Constitución,

y paso seguido autorizando mediante Declaración Constitucional 003/2013 de 25 de abril la reelección por última vez de Evo Morales (periodo 2015-2020). Proceder que vulnera la Constitución, su propia jurisprudencia y elimina el compromiso de Evo Morales de respetar los mandatos anteriores durante la vigencia de la Constitución abrogada.

16. El Presidente de la República tiene como atribución “Cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes” (art. 172.1 CPE) y como correlato la Carta Fundamental le impone el mandato de “Hacer cumplir las sentencias de los tribunales” (art. 172.13 CPE). Ante tal conflicto jurídico lo ético y legal no es aferrarse a la perpetuidad del poder, sino respetar y cumplir los límites que ha fijado el constituyente en el art. 168 de la Constitución, disposición que no puede ser reformada de facto, porque sería “AUTO GOLPE A LA DEMOCRACIA”.

17. Ciertamente, las sentencias del TCP son de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio; sin embargo, si violan derechos humanos y la Convención que ha sido ratificada por Bolivia, no son firmes e inimpugnables y menos causan estado. Por tanto, por efecto del principio de legalidad se genera una virtual divergencia entre el deber ser moral del derecho (interpretación espuria del art. 23 de la CADH) y su ser efectivo, derecho justo.

18. Si los derechos humanos son universales y el Referéndum es obligatorio y vinculante, la sentencia 0084/2017 del TCP no puede ser retroactiva e ir contra los principios de prospectividad y seguridad jurídica.

19. El Vicepresidente del Estado Plurinacional y presidente nato de la Asamblea Legislativa Plurinacional y el Presidente de la República carecían de ética y legalidad para sancionar y promulgar la Ley 1096 de Organizaciones Políticas de 4 de septiembre de 2018, cuya finalidad de las meteóricas primarias terminaron con la vergonzosa complacencia del Tribunal Supremo Electoral habilitando al binomio Evo Morales Ayma y García Linera el 8 de diciembre de 2018, aplicando procazmente la SCP 0084/2017 y la viciada falacia doméstica de sepultar los efectos del Referéndum 21 f., determinación política que entraña en otras jurisdicciones legales y constitucionales, responsabilidad por emitir resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, incumplimiento de deberes al no ser un árbitro colegiado imparcial y daño económico (27 millones en gastos insulsos); jornada insólita verificada el 27 de enero de 2019 donde no hubo competencia internas en los partidos políticos, con la consiguiente derrota catastrófica del partido de gobierno. Se reseña que los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) no son jueces confiables, para llevar adelante un proceso democrático limpio y transparente, porque hasta la fecha no han demostrado el saneamiento público del padrón electoral con participación de

delegados de los diferentes partidos políticos y que la OEA en la auditoría realizada hasta diciembre de 2017, ha observado que existen 48.759 carnet duplicados para votar, 99.775 personas registradas en el padrón con documentos del Registro único Nacional (RUN) o libreta de servicio militar que no son válidos para sufragar y 4.732 cédulas inconsistentes (C.I). Por consiguiente, es impensable participar en elecciones de 2019 si los vocales del TSE están subordinados al régimen político y el padrón electoral se asemeja a un “concierto de la banda de los siete”, que por ética deberían renunciar.

20. La Ley de Organizaciones Políticas (LOP) ha sido excluyente y discriminatoria con los colectivos y plataformas ciudadanas y viola el art. 26.I y II de la Constitución y los arts. 7 y 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que reconocen que todas las personas son iguales ante la ley y por ende tienen derecho de participar en el gobierno e instituciones del Estado. Se agrava la situación, cuando el TSE resuelve empadronar en el extranjero solo a los bolivianos que residen en Argentina, Brasil, Chile, España, Colombia, Perú, Estados Unidos, Italia, Suiza, Japón, excluyendo a otros países y dentro de aquellos países a ciudades importantes con densidad migratoria boliviana, como si el voto no fuera libre y universal o nuestros compatriotas fueran apátridas; además sin ningún control y seguridad en el proceso. Este procedimiento parece ser una ortodoxia comunista totalitaria, al violar el artículo 25 a) y b) de la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ahora bien, ante la gama de razonamientos precedentes y los caracteres que presentan los derechos humanos: Innatos o inherentes, Necesarios, Inalienables, Imprescriptibles, Oponibles “erga Omnes”, Universales, Indivisibles e Interdependientes, congruentes con estas cualidades la Corte IDH ha asumido que “el respeto a los derechos humanos constituye un límite a la actividad estatal, lo que vale para cualquier órgano o funcionario que se halle en una situación de poder, respecto de los demás ciudadanos”. Entonces, es ilícita toda forma de ejercicio de poder público que viole los derechos reconocidos por la CADH, cuando no existe separación de poderes, irrespeto por la democracia participativa transparente, ausencia de garantías mínimas del debido proceso, persecución y juzgamientos ilegales solo por tener una opinión diferente a los del régimen, violación de la libertad de expresión, seguridad física de las personas individual o colectiva, protección de pueblos indígenas ante modelos de desarrollo extractivos, hidroeléctricos, forestales, monocultivos y de infraestructura, torturas, desapariciones y toda forma de trato degradante e inhumano.

Por eso, tomando en cuenta que en el derecho internacional de los derechos humanos, el sujeto es la persona humana física o colectiva, de modo

que el incumplimiento de los compromisos internacionales contenidos en los tratados específicos implica nomás la responsabilidad del Estado frente a la víctima; la reelección indefinida de Evo Morales y García Linera en base a una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional N° 0084/2017 en abierta tergiversación interpretativa del artículo 23.1.b. de la CADH, que no reconoce en su contenido la perpetuidad en el poder no es un derecho humano. Entonces, claro está que ante el incumplimiento del Referéndum 21f, la democracia y la Constitución se ensombrecen y agotadas que han sido las instancias del orden jurisdiccional interno reclamando la violación de los derechos políticos y humanos, entendemos que la Comisión IDH tiene la función en casos urgentes e irreparables la de “solicitar la opinión consultiva” a la Corte IDH o bien puede hacerlo cualquier Estado miembro de la OEA que hubiera reconocido la competencia jurisdiccional de la Corte, para someter a su decisión el caso relativo a la interpretación del artículo 23 de la CADH, conforme a la función que le confiere el artículo 64 de la Carta, con el propósito exclusivo de determinar si la “reelección indefinida” es un derecho humano o no es.

Con respecto a la ilegalidad de la habilitación del presidente y vicepresidente en las elecciones de 20 de octubre de 2019, solventa el Dictamen de Venecia la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en los casos Yatama contra Nicaragua y Castañeda Gutman contra México, en cuyos casos la Corte al interpretar el artículo 23.1.b de la Carta Americana de Derechos Humanos (CADH) dice: “La aplicación y previsión de requisitos para ejercitar los derechos políticos, no constituyen *per se*, una restricción indebida a tales derechos políticos. Estos no son absolutos y pueden estar sujetos a limitaciones...”. También la Corte IDH subraya: “El derecho a ser elegido se ejerce regularmente en elecciones periódicas, auténticas y realizadas por sufragio universal e igual, por voto secreto, que garantice la libre expresión de los electores”. Por tanto, esa jurisprudencia pone en entredicho al señor Luís Almagro Secretario General de la OEA, cuando en su visita a Bolivia en mayo de 2019 dice: “Que contra una decisión constitucional no encuentra un mecanismo inhabilitante para el actual presidente de Bolivia”.

5. Pueblos indígenas y regulación de bienes comunes en Bolivia

En el marco del sistema internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas, Aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas el 17 de septiembre de 2007.

Declaración que reconoce “los derechos colectivos” de los pueblos indígenas, incluyendo la libre determinación, derechos a sus tierras, territorios y

recursos naturales. Con la Complementariedad del Convenio 169 de la OIT, sobre Pueblos Indígenas y Tribales de 1989.

Las Naciones Unidas estiman que más de 370 millones de personas viven en 90 países en situaciones vulnerables y marginadas del mundo, de las cuales un 15% son pobres y un tercio viven en extrema pobreza.

En América Latina la población indígena se estima en 40 millones de personas, que enfrentan niveles altos de pobreza y extrema pobreza, por no tener acceso a la salud, educación y medios de producción que mejoren sus condiciones de vida.

Colombia posee una de las legislaciones más avanzadas para tierras étnicas y desde 1989 al presente, cuentan con más de una veintena de disposiciones legales, que estructuran el paraguas de protección de los bienes comunes de los pueblos indígenas.

Perú se ha dotado de una Ley para la protección de Pueblos indígenas u originarios en situación de aislamiento y de contacto inicial. Y al igual que Colombia han ratificado el Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos indígenas y tribales en países independientes.

En tanto que en Bolivia, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) promovió la Ley de Protección de Naciones y Pueblos Indígenas Originarios (LPNPIO) en situación de alta vulnerabilidad, la que fue promulgada el 6 de diciembre de 2013. Ley que ha sido distorsionada en su aplicación por el actual régimen de gobierno, al haber procedido a la desintegración de sus organizaciones comunitarias naturales, como el caso de las comunidades de tierras bajas (conocidas como el TIPNIS), y por ende, rompiendo con la continuidad de sus tierras.

Ahora bien, en el tema de los Bienes Comunes que comprende una serie de recursos físicos como el agua o virtuales como el conocimiento que son gestionados por una comunidad, implica que todos los individuos de la comunidad tengan derecho a hacer uso u a obtener beneficios de sus recursos.

Significa que en un “Bien Común” para que lo sea debe estar disponible para toda la comunidad, no debe ser excluyente. Así, un bosque o reserva natural gestionado podrá ser un bien común, puesto que está a disposición de toda la comunidad y su uso adecuado no impediría su disfrute por las generaciones futuras.

De esta manera es necesario implementar una adecuada y sostenible gestión de los recursos y servicios para que puedan ser considerados “bienes comunes” (BC). Esto quiere decir, que los bienes comunes deben gestionarse desde la colectividad de forma democrática. Verbigracia los territorios de

comunidades indígenas, se han conservado centenares de años, se trata de convertirlos en inalienables por su propia naturaleza.

Solventando la problemática de los bienes comunes en el ordenamiento jurídico de Bolivia, es importante tomar como punto de partida el “derecho al agua” como derecho humano (art. 16.I CPE) y el derecho a un medio ambiente sostenible, protegido y equilibrado (art. 33 CPE). Para comprender el rango constitucional que tienen los bienes comunes, es necesario entender que ante cualquier atentado o restricción de persona individual o colectiva, los afectados tienen derecho a asumir defensa y desplegar todos los procedimientos legales para asegurar la protección.

Además, vale clarificar que en los bienes comunes no se aplica el principio de exclusión; es decir, que son de carácter universal para todos los propietarios, pudiendo hacer un uso limitado entre ellos. También se apunta que los bienes comunes no tienen que ser necesariamente de titularidad pública, sino que va relacionada con la titularidad que se da a un conjunto de seres humanos con derechos comunes, verbigracia una fuente de agua (acequias para riego comunitario).

En BOLIVIA según el informe del Centro de Investigaciones y Protección de Bosques (CEDIB), en la actualidad las áreas forestales protegidas alcanzan a las 18.271.699 hectáreas. De éstas 3.043 son afectadas por estar comprometidas por contratos petroleros, alcanzando al 17% del total, entre las que se encuentran pasando este drama: los territorios del TIPNIS, Madidi, Aguarague, Amboró, Pílon, Tariquía y Cuenca del Río Madre de Dios, cuyo potencial se estima entre 12 y 120 millones de pie cúbicos de gas convencional y de 4.000 a 40.000 millones de barriles de petróleo.

Sobre la exploración apuntada, el Ministro de Hidrocarburos dice: *“Que si hay algún daño ambiental, se procederá con la compensación a los habitantes de las áreas”*. ¿Me pregunto si la tala de árboles para las planchadas y campamentos no constituyen degradaciones al ecosistema? Y ¿Las filtraciones de petróleo contaminando los bosques se resuelven con la indemnización económica? Considero que es la vida del planeta la que está en terapia y los seres humanos no podemos permanecer escépticos, con la destrucción salvaje de un modelo extractivista, disfrazado de comunitario y defensor de la madre tierra.

Como notas características del “Derecho a la madre tierra”, conviene destacar que BOLIVIA cuenta con 66 de los 112 ecosistemas existentes en todo el mundo.

Tiene en la actualidad más de 60 áreas protegidas y 22 parques nacionales, éstos últimos alcanzan la superficie de 182.716.99 km, que corresponde al 16,63% del territorio nacional.

El tema de los “Bienes comunes”: el agua, cuencas, ríos, manantiales, parques y reservas naturales, están protegidos por la Constitución por su carácter de interés colectivo; sin embargo, es el gobierno que se encarga de romper con la biodiversidad y el ecosistema. Verbigracia, la carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos a Santo Domingo que pasa por el corazón del TIPNIS, sin estudios medioambientales y sin cumplir con la consulta previa, libre, obligatoria e informada a las comunidades (El Parque nacional del TIPNIS ha sido creado por Decreto Supremo 7401 de 22 de noviembre de 1965, conformado por 64 comunidades, con una población de 49.000 pertenecientes a las culturas Chimanés, Yucarés y Moxeños y tiene una extensión de 13.722 kilómetros).

Sin embargo, una de las grandes amenazas al parque nacional del TIPNIS, ha sido la expansión de los colonos que han logrado sembrar en el polígono 7 aproximadamente 3.000 hectáreas de plantas de coca en forma ilegal, que sumadas a las 22.000 hectáreas aprobadas por la Ley de la Coca de marzo 2019, suman 25.000 has, coca del Chapare que está destinada el 95% a la fabricación de cocaína.

5.1 Los bosques de la Chiquitanía Amazónica en llamas

Por otra parte, existen instrumentos jurídicos que pueden ocasionar mayor conflictividad sobre todo cuando prevalece el tema político-económico sobre los valores y bienes colectivos, basta recordar el Decreto Supremo (DS) N° 3973 de 9 de julio de 2019, que modifica la Ley 741 en su artículo 5, mediante el cual el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia autoriza el desmonte forestal y quema en áreas protegidas para ampliar la frontera agrícola controlada por la Autoridad de Tierras y Bosque (ABT) y por el Instituto de Reforma Agraria (INRA) en los departamentos de Santa Cruz y Beni. Desplazando a 2.009 familias del Chapare boliviano (no indígenas) hacia tierras bajas, para dotarles de 500.000 hectáreas de tierras para la agricultura. Los resultados de la aplicación de la norma terminó con el incendio de aproximadamente un millón de hectáreas en la Chuquitanía (San Ignacio, Roboré, San José, San Rafael, San Matías, Río Negro, Taperas; Ipiá, Pesoe, entre otras poblaciones), afectando al ecosistema, la flora y fauna cuya recuperación del suelo se estima en cien años por falta de bioestructura, ya que los micro organismos se han quemado y extinguidos (Cáceres: 2019); que no tenga hoy responsables por actos abusivos y arbitrarios, nada parece resistirse a la crítica y al orden penal que puede abrirse en otro sistema democrático diferente. El negarse a la ayuda internacional de inicio y sin justificación fue adoptar una postura inclemente e inhumana, si lo

que se destruye con el avance de los incendios y las enfermedades broncopulmonares, es la vida humana, la vida forestal y la vida del planeta.

Lo más grave, la tragedia que empezó 4 de agosto de 2019 afectó a dos áreas forestales protegidas: Tucabaca y Otuque, sin contar la pérdida de ganado bovino, caballar y silvestres. Es así, ante la presión de autoridades cívicas y municipios de las provincias, el gobierno recién el 21 de agosto autoriza la contratación de un avión supertanker que empezó a operar el viernes 23 de agosto a horas 14:58 desplazando su descarga en su primer vuelo por la población de Taperá, el sábado lo hizo sobre las poblaciones de Ipiá y Pesoe, el domingo descargará sobre los focos de incendio en San Rafael, San Matías y Río Negro, cuando los daños son irreversibles.

El sábado 24 de agosto la Organización Indígena Chiquitana (OICH), exige al gobierno de Evo Morales que se declare alerta nacional por los incendios que afectaron a la Chiquitanía Boliviana y la abrogación de la Ley 741 de autorización y desmonte hasta 20 hectáreas.

Según el candidato a la presidencia (Ortíz: 2019), el gobierno del MAS., impulsa la deforestación anual de 300.000 hectáreas de bosque y entrega prebendalmente más de 2.000.000 de has de tierras forestales del bosque seco chiquitano, que es patrimonio natural de Bolivia y la humanidad. En tanto, que Carlos Mesa candidato por Comunidad Ciudadana a tiempo de solidarizarse con los pobladores de la Chiquitanía, se pronunció que se solicite la ayuda internacional, se haga una investigación seria sobre los responsables del incendio en la Chiquitanía, institucionalización técnica y científica de la ABT e INRA, se eviten los avances en sembradíos de coca y se haga una revisión de los cultivos.

También, la sociedad boliviana se volcó solidariamente para ayudar a las poblaciones afectadas por los incendios, donde se requiere urgente de medicamentos, alimentos, agua, médicos, veterinarios, biólogos, etc.

En resumen, entendemos que debería abrogarse la Ley 741 de 2001 y el DS. N° 3973 de 9 de julio y así cancelar todo desmonte y quema de bosques y la reparación de los daños que sufrieron los Municipios que fueron víctimas del siniestro. La restitución de tierras forestales se recoge en las SCP 781/2016-S3 (restitución de tierras como áreas forestales), SCP1018/201, y SCP 70/2017-S3. Además, tendría que haber una “alianza de cooperación efectiva de todos los países del mundo”, especialmente, de los Grupos G-7, G-20, etc., para salvar el Patrimonio Universal Amazónico. Finalmente, ante la persistente presión de los pobladores de Roboré que a gritos y en su desesperación pedía que el gobierno solicite la cooperación internacional, Evo Morales autoriza la ayuda internacional, al conocerse que Argentina, Perú, Chile la ofrecieron

prácticamente desde el inicio de los focos de incendios. Esta decisión gubernamental es la segunda de las reacciones tardías que a remolque la asume el gobierno (25-08-2019).

Como la Amazonia es el pulmón del planeta y genera el 80% de oxígeno a la población mundial valdría preguntarse ¿Quiénes son los autores intelectuales del voraz incendio de magnitudes y consecuencias devastadoras de los bosques y áreas protegidas del Bosque Chiquitano? ¿Quiénes incendiaron la Amazonía Brasileira? Dejemos la laxitud y procedamos luego del control del desastre ecológico a la implementación de una auditoría técnica medio ambiental por organismos internacionales de la Unión Europea, para determinar responsabilidades, civiles y penales por el ecocidio y biocidio continuado a consecuencia de políticas perversas contra el ecosistema.

6. Conclusión y propuesta

I. Instancia global multidimensional con derecho a decidir

Si se examinan las leyes, las cláusulas constitucionales y particularmente la función jurisdiccional de los Tribunales Constitucionales, garantes indiscutibles del Estado de derecho y fortalecimiento de los procesos democráticos, no puede dejar de apreciarse que existe un incremento, tanto en la inflación de los fines del Estado como en las decisiones constitucionales relativas a los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales, que solo pueden ser corregidos por la acción oportuna y necesaria a través de los mecanismos de garantías que competen a la Comisión IDH y a la Corte IDH. ¿Cómo se reflejan estas garantías de la justicia constitucional si los sistemas de gobierno han cooptado las funciones de instituciones nacionales y supranacionales y los artífices prominentes de la dictadura son tribunales constitucionales?, debería ***“construirse una instancia global multidimensional integrada por países de comprobada solvencia democrática que tengan el “derecho a decidir” y tomar acciones urgentes y rápidas para reivindicar, la democracia y proteger los derechos humanos”***, con poderes para denunciar ante la Corte Penal Internacional a los responsables por presuntos delitos de lesa humanidad.

Así también, en situaciones de prácticas frecuentes y manifiestas de tergiversación y ruptura de la Constitución por Tribunales Constitucionales prescindiendo del valor del Referéndum, la opinión consultiva sea activada en forma obligatoria por la Comisión IDH o por cualquiera de los presidentes de los Estados miembros de la OEA, de modo que más allá de aprender cuán caros son los derechos y libertades en democracia, valdría que la Corte IDH aplicando los criterios de oportunidad, urgencia y los principios proactione y

proporcionalidad haga la interpretación ponderativa del artículo 23 de la Convención ADH para restaurar: a) el derecho a la democracia, b) el derecho a la alternancia, c) los derechos políticos contenidos en el valor del Referéndum convocado legalmente y d) La preservación de la Convención Americana de los Derechos Humanos que es instrumento regional base de convivencia, paz y libertad en los países de la región americana que la han ratificado, y definitivamente impedir la verticalidad ilegal e inconstitucional de reelección indefinida.

II. Tribunal Internacional por los derechos de la naturaleza y bienes comunes: despliegue eficaz

En cuanto a la preservación de los bienes comunes, en Bolivia se crean sistemas para criminalizar la disidencia de indígenas de tierras bajas (como la represión de la marcha en Chaparina a los indígenas del TIPNIS, el 25 de septiembre de 2011) que derivó en la violación de los derechos humanos de niños, mujeres embarazadas y familias en situación de pobreza y extrema pobreza, con los consiguientes procesos penales a los dirigentes y oros que consiguieron salir del país en busca de refugio. Así no se puede hablar de igualdad e inclusión social, si no se respeta la biodiversidad y hábitat natural de los pueblos indígenas originarios campesinos y tampoco se respetan los parques nacionales, y tampoco se aplica la consulta previa, libre, obligatoria e informada en materia de explotación de los recursos naturales. Por tanto, el compromiso de los Estados que son parte de los Tratados y Acuerdos Internacionales implica la obligación de promover el respeto universal de los bienes comunes ***Conformando una alianza efectiva de los países industrializados G7, G10, G20 para salvar la Chiquitanía y la Amazonía*** y también se concrete con urgencia ***“el Tribunal Internacional por los Derechos de la Naturaleza, dotado de mecanismos reforzados para tener un control más efectivo en las acciones salvajes de deforestación sistemática de los gobiernos socialistas de siglo XXI y de los de extrema derecha”***.

Sucre, 24 de agosto de 2019

Bibliografía

- DUVERGER, M., 1970. *Instituciones políticas y Derecho Constitucional*. Barcelona España: Ariel 5ª Edición, p. 79.
- ESCOBAR ROCA, G., 2018. *Nuevos derechos y garantías de los derechos*. Madrid, Barcelona, Buenos Aires, Sao Pablo: Marcial PONS, p. 131.

- GARECA PERALES, P., 2017: *Praxis jurisprudencial constitucional*. Sucre Bolivia: Imprenta Rayo del Sur SRL, pp. 89, 177 a 185.
- GRAU, L., 2009. *Los orígenes del constitucionalismo norteamericano*. Madrid: Dykinson, Universidad Carlos III de Madrid, t. II, p. 177.
- JUNIOR, G. L., 2017. *EL nuevo constitucionalismo latinoamericano. Un estudio para Bolivia*. La Paz, Bolivia, pp. 201-202.
- MALDONADO SÁNCHEZ, A., 2017. El Capítulo Económico de la Constitución y el bloque de constitucionalidad en México. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 23 Año, Anuario, Fundación Conrad Adenauer-Stiftung*, República Federal de Alemania, Bogotá Colombia. p. 506.
- ORTÍZ TORRICOS, M.R., 2017. El derecho a la libertad de expresión e información en Perú, Bolivia y Colombia desde la perspectiva de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. *Anuario de Derecho Constitucional Latinoamericano 23º Año, Anuario, Fundación Conrad Adenauer-Stiftung*, República Federal de Alemania, Bogotá Colombia, p. 535.
- RIVERA SANTIVÁÑEZ, J.A., 2004. *Jurisdicción Constitucional Procesos constitucionales en Bolivia*. Cochabamba-Bolivia: Grupo Editoril Kipus, Segunda edición, p. XXVII.
- YÁÑEZ CORTES, A., 2017. *Principio de legalidad y retroactividad*. Sucre-Bolivia: Imprenta Rayos del Sur SRL, p. 26.

Noticias y sitios web de interés

www.correodelsur@bo

www.eldeber.com.bo

www.eldeber.com.bo

www.eldía@bo

www.es.wikipedia.org/wiki/referéndum-de-independencia-de-cataluña-de-2017

www.evl.diarioconstitucional@cl

www.lexicommoncoredem.inflexicommon

www.lexicommoncoredem.inflexicommonwww.es.wikipedia.org/wiki/referéndum-de-independencia-de-cataluña-de-2017

www.noticiasfides@bo

www.paginasiete@bo